

# 6402

José María Rojas Guerra

Sociólogo, profesor presionado de la Universidad del Valle

Socio adherente de La Mariacano

En el lenguaje castrense los términos utilizados son portadores de un contenido jerárquico que no admite ambigüedades. De este modo, positivo y negativo son términos excluyentes. “Positivo, mi coronel”, Negativo mi capitán” son, por ejemplo, expresiones sintéticas con las cuales un subordinado informa a su superior del resultado de una orden o una misión que le ha sido encomendada. Cuando en los medios de comunicación hizo su aparición el término “falso positivo”, como una innovación lingüística originada en el ámbito operacional del ejército colombiano, puesto que los periodistas se han limitado a informar los hechos de guerra en los mismos términos del lenguaje castrense, quedó claro que algo tenebrosamente irregular había ocurrido en el curso de la guerra contrainsurgente que libraban las fuerzas militares del Estado. Admitir que lo positivo, indicativo del éxito de una operación militar podía ser falso, era algo mucho más grave que una contradicción en los términos. Si la abrumadora cantidad de positivos constituidos por las muertes causadas por el ejército al enemigo insurgente durante el período de los dos gobiernos del expresidente Uribe eran indicativos de haberle estado ganando la guerra a la guerrilla, el reconocimiento de la existencia de “falsos positivos” significaba tener que admitir la posibilidad de que era falso haber estado ganando la guerra y que la sociedad colombiana lo que necesitaba era la concreción de un proceso de paz con la insurgencia. Reconocer esto significaba lisa y llanamente admitir que la política de “seguridad democrática” del expresidente Uribe no solamente no era el camino hacia la victoria contundente sobre el enemigo insurgente, sino algo peor: que era una gran mentira y que si algo se había democratizado no era la seguridad ciudadana sino la muerte de los ciudadanos, algo que es típico de la delincuencia. Y es que la ejecución de civiles en estado de total indefensión y presentados luego como guerrilleros muertos en combate, con uniforme y armas, es lisa y llanamente un crimen de Estado, ya que el ejecutor es el ejército del Estado.

De este modo, los términos “falsos positivos” en el lenguaje castrense contienen un doble encubrimiento: a) que se trata de crímenes de Estado y b) ejecutados por el ejército en el marco de una gigantesca mentira política denominada Seguridad Democrática. Ahora bien, la historia ha venido demostrando que la defensa de una mentira solo puede lograrse mediante otras mentiras y el expresidente Uribe, en la defensa de su política de Seguridad Democrática que es para él su gran capital y patrimonio político, ha tenido que incurrir en nuevas y calamitosas mentiras. La primera, la más grande y desastrosa para esta desgraciada nación, fue la de haber considerado a Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa, quien reconoció la existencia de los falsos positivos en el ejercicio de su cargo, como un traidor y como un guerrillero una vez que en el ejercicio de la Presidencia decidió iniciar un proceso de negociación política del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.

Como el hecho de calificar de traidor a su sucesor no invalidaba necesariamente el proceso de paz, entonces se tuvo que recurrir a otra mentira: la negación de la existencia de un conflicto armado en Colombia. Esta descomunal mentira procuraba dejar como un sinsentido al proceso de paz. Puesto que si no había conflicto, nada ni con nadie había que negociar. Pero esta negación arrastraba necesariamente para el ejército la falsa suposición de que la guerra había terminado. Y esto solo resultaba aceptable si se asumía que la guerra había concluido con una estruendosa victoria militar. Entonces, como por arte de magia, surgió la figura del héroe para simbolizar al ejército victorioso. Solo así, si la sociedad colombiana tuviera un ejército de héroes, los falsos positivos no existieron y si existieron se trató de algunos casos aislados, que en nada podían afectar la pureza de la institución castrense. Pero al aplicar la teoría de la manzana podrida se olvidaron que la extirpación de la susodicha fruta había ocurrido demasiado tarde, cuando ya la canasta experimentaba una infección sistémica.

Como los acuerdos de paz tuvieron el acompañamiento institucional de la comunidad de las naciones, razón por la cual son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano, a pesar del rechazo político interior con la victoria en el plebiscito lograda por el partido Centro Democrático, el partido de gobierno del presidente actual, la JEP que ha sido la única institución creada en el marco de los acuerdos de paz y que no ha podido ser destruida ni

desvirtuada por el mismo poder de estado que controla el partido de gobierno, la JEP ha podido documentar 6402 casos de falsos positivos en el período de ocho años, entre 2002 y 2010, durante los cuales la política de Seguridad Democrática fue la política de gobierno. Que esta cifra duplique los crímenes de estado cometidos durante los 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile es aterrador. ¿Qué clase de democracia tenemos los colombianos? Para que el ejército colombiano no siga enlodándose en el despliegue de una guerra sucia, Colombia tiene que dejar de ser una Democracia de la Muerte.

José María Rojas